



Punto de vista

Isaac Katz

X: @econodasta

Herencia maldita

El periodo presidencial de López está por acabar; le quedan siete días y no los va a desperdiciar. Con la complicidad servil de diputados y senadores, continuará con la vorágine de destrucción que ha caracterizado todo su gobierno. Ya se aprobó la reforma que le quitó la independencia al Poder Judicial de la Federación y acabó de facto con la protección judicial de la libertad y los derechos individuales y también ya pasó como un mero trámite en la Cámara de Diputados (lo mismo sucederá en el Senado) la militarización de la seguridad pública al haberse transferido la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la última semana de septiembre, los legisladores de Morena y sus rémoras "trabajarán" a marchas forzadas porque aún tienen otros encargos que López les ordenó: la reforma del Poder Legislativo que elimina diputados y senadores de representación proporcional con lo que prácticamente se garantizaría que todos los legisladores sean de Morena y aliados, tres reformas constitucionales que violan el TMEC y otros tratados internacionales: la desaparición de los órganos autónomos, la prohibición de minería a cielo abierto, las reformas a Pemex y CFE para que ya no sean empresas del Estado, sino organismos públicos además de que se les concede un trato preferencial discriminando a las empresas privadas.

Los legisladores también tienen que atender la prohibición para otorgar nuevas concesiones en el uso de agua para uso no residencial en prácticamente todo el país con lo cual se impide el crecimiento industrial y agrícola en esas regiones, la prohibición para utilizar la fractura hidráulica para explotar hidrocarburos con lo que se garantiza que todo el gas natural seco y muchas de las reservas de petróleo se quedarán en el subsuelo, establecer en la Constitución los programas Sembrando vida y Jóvenes Construyendo el Futuro sin considerar su eficiencia y eficacia ni el costo fiscal y sus fuentes de financiamiento y establecer también en la Constitución la indexación del salario con lo que se garantiza un piso de inflación o una atonía permanente de la actividad económica y otras reformas más.

Suponiendo que se aprueban todas estas reformas, cada una por sí misma, pero con un efecto exponencial al ser consideradas en su conjunto, deterioran y hacen más ineficiente el arreglo institucional que estará vigente en el país a partir del primer día de octubre, una herencia maldita que habrá recibido Claudia Sheinbaum por parte de su antecesor. Esto recuerda la también herencia maldita que el presidente José López Portillo le dejó al presidente Miguel de la Madrid y que representó para México una década perdida en crecimiento económico con un muy elevado costo social.

Sheinbaum inaugurará su periodo presidencial en una coyuntura en la cual, dada la información disponible de consumo privado,

inversión y comercio exterior, se anticipa que durante el cuarto trimestre de este año la economía prácticamente no crecerá; además, el PIB por habitante al cierre del año será inferior al que hubo al final de 2018 cuando inició el gobierno de López. Ella se inaugurará con un país estancado y más pobre y las perspectivas de corto y mediano plazo no son halagüeñas.

En el corto plazo habrá que lidiar con un significativo problema de finanzas públicas derivado de la irresponsabilidad fiscal de López, quien dilapidó billones de pesos en sus caprichos: la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la construcción del AIFA, la refinería, el trenecito peninsular, el ferrocarril del Istmo, Mexicana de Aviación, la expropiación de la productora y exportadora de sal en Baja California Sur, el malogrado rescate de Pemex explicado por una estrategia de negocios sin racionalidad económica, pero lleno de ideología retrógrada, subsidios a CFE para cubrir su ineficiencia, etcétera.

López le deja a Sheinbaum un déficit financiero del sector público de 6% del PIB con un déficit primario que implica que hay que endeudarse para pagar intereses, un saldo de requerimientos financieros de 52% del PIB derivado de un endeudamiento durante su gobierno de 7 billones de pesos y sin recursos en los fideicomisos que dilapidó, con compromisos crecientes de gasto público en pensiones, las transferencias a Pemex y CFE, los recursos para terminar las obras (los dos ferrocarriles y la refinería), los subsidios a los caprichos de López y con un gobierno federal sin recursos, sin capital humano y sin capacidad de operación. Ante este escenario crítico y, por lo mismo, no sostenible, es que habrá que hacer un ajuste fiscal significativo que reduzca el déficit financiero y se logre un superávit primario. Es probable, en consecuencia, que la economía experimente una recesión el próximo año.

En el mediano plazo las perspectivas son de una economía con muy bajo crecimiento, con un PIB por habitante que prácticamente no aumentará. Y esto habrá sido el resultado del deterioro en el arreglo institucional producto de la destrucción que López encabezó. Las reformas que están siendo aprobadas en el Congreso eliminan los contrapesos en el ejercicio del gobierno, socavan la garantía y protección de los derechos individuales y eliminan la certeza jurídica. La consecuencia será menores flujos de inversión nacional y extranjera y menor crecimiento económico.

Si Claudia Sheinbaum no quiere que este escenario de estancamiento se materialice y que, además, las finanzas públicas entren en crisis, tiene que convencer a los legisladores para que detengan la aprobación de varias de las reformas, particularmente las tres que violan el TMEC destacando la desaparición de los órganos autónomos y las reformas constitucionales en el sector energético. Aunque enfurezca, tiene que decirle a López que no quiere la herencia maldita que él pretende legarle.